

La deuda bate récord tras dispararse en 200.000 millones durante el Covid

EN MÁXIMOS/ El endeudamiento público superó en junio los 1,42 billones de euros, la cifra más alta de su historia, y se situó por encima del 122% del PIB, fruto del ingente gasto para combatir la pandemia.

J. Díaz, Madrid

La inmensa mochila de deuda pública que España carga a sus espaldas es cada vez más abultada. Entre marzo de 2020, mes en el que estalló la pandemia que lo ha cambiado todo (o casi todo), y el pasado junio, el endeudamiento público se disparó en 201.000 millones de euros. Es decir, en apenas dieciséis meses aumentó un 16,4%, a un ritmo de 12.568 millones mensuales de media, batiendo un récord histórico tras otro sin apenas respiro, hasta superar en junio los 1,42 billones de euros, una cifra sin precedentes en la trayectoria de nuestras cuentas públicas, según se desprende de los datos publicados ayer por el Banco de España. Esa cifra equivale al 122,1% del PIB, un porcentaje ligeramente inferior al de meses precedentes (cerró marzo por encima del 125%) gracias a que la economía ha crecido con fuerza en el segundo trimestre (un 19,8% en tasa anual), rebajando el peso relativo de la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Precisamente, el Gobierno espera concluir el año con una ratio de deuda sobre PIB del 119,5%, gracias precisamente al tirón de la economía, que,

LA IMPARABLE ESCALADA DE LA DEUDA

Evolución del endeudamiento público en España según el Protocolo de Déficit Excesivo. En billones de euros



Expansión

Fuente: Banco de España

pese al renqueante inicio de año, ha ido ganando fuerza a partir del segundo trimestre. Ese crecimiento apenas maquilla, sin embargo, la enorme factura que la crisis sanitaria y los esfuerzos realizados por el Gobierno para mitigarla han pasado hasta ahora a las arcas públicas, sometidas desde hace meses a una gran presión.

De hecho, entre marzo de 2020 y junio de este año, el endeudamiento público ha crecido en 23 puntos de PIB,

Entre marzo de 2020 y junio pasado, el endeudamiento público ha crecido en 23 puntos de PIB

un desfase que podría costar décadas digerir a tenor de los antecedentes. Entre 2014 y 2019, años de recuperación, España solo logró rebajar su deuda del 100,7% del PIB al 95,5%; esto es, poco más de 5

puntos porcentuales, a razón de 1,04 puntos anuales, a pesar de que el PIB creció en torno al 20% en ese periodo.

Hipoteca futura

Si en el futuro se mantuviera ese ritmo de adelgazamiento, España tardaría cerca de 23 años en digerir solo la deuda acumulada hasta ahora durante la pandemia, hipotecando así el futuro de las próximas generaciones y cercenando no solo el potencial de

crecimiento de la economía, sino también su margen de maniobra para encarar nuevas crisis.

De la ingente bolsa de deuda acumulada hasta junio, la mayor parte corresponde a la Administración del Estado, con 1,23 billones de euros, 146.126 millones más que al cierre de marzo de 2020 (un aumento del 13,4%). Las comunidades autónomas también han cebado su deuda, aunque en mucha menor pro-

El grueso de la deuda se concentra en la Administración del Estado, con 1,23 billones de euros

porción: un alza del 4,9% en ese periodo (14.650 millones), hasta alcanzar los 312.929 millones de euros. Mientras, la Seguridad Social ha disparado su deuda hasta los 91.855 millones, 36.830 millones de euros más que hace dieciséis meses (casi un 67% más). Por contra, los ayuntamientos han aligerado tibiamente su carga, reduciendo su deuda hasta los 22.689 millones en junio frente a los 22.872 millones de marzo del año pasado (un recorte de 183 millones).

El Banco de España es menos optimista que el Ejecutivo y, en su escenario central, estima que la deuda pública cerrará este año ligeramente por encima del 120%, antes de reducirse hasta el 117,9% en 2022 y repuntar de nuevo al 118% en 2023, unas cifras todavía astronómicas que prácticamente duplican el techo máximo de deuda fijado por Bruselas (el 60% del PIB), cuyas reglas fiscales, ahora suspendidas por el Covid, volverán a estar en vigor en 2023.

En este contexto, el supervisor español advierte desde hace tiempo de la necesidad de diseñar cuanto antes un plan de consolidación fiscal creíble que envíe a los mercados un mensaje de compromiso con el rigor presupuestario y el reequilibrio de las cuentas públicas, aunque dicho ajuste no se implemente hasta que la recuperación esté encarrilada.

Llegan a España 9.000 millones del fondo europeo

J.D. Madrid

Un mes después de que el Ecofin diera luz verde al primer pago de ayudas europeas a España, Bruselas hizo ayer efectivo el desembolso de los 9.000 millones de euros prometidos en concepto de prefinanciación. Es la primera inyección de fondos comunitarios que irriga la economía española de los más de 69.500 millones a los que opta en ayudas directas, ampliables hasta 140.000 millones si el Ejecutivo recurre también a los préstamos. “España ha recibido 9.000 millones en prefinanciación para impulsar la recuperación y respaldar nuestro programa de reformas e inversiones en curso”, señaló ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien añadió que “estamos en ca-

mino de implementar los cambios necesarios para un modelo de crecimiento más verde, digital, feminista, justo y cohesionado”. Calviño, que resaltó que las ayudas directas que España recibirá en un trienio equivalen “a las transferencias que hemos recibido de fondos estructurales en los últimos 30 años”, aseguró que las inversiones se acelerarán en la segunda mitad del año. En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “el desembolso realizado hoy (por ayer) supone un momento decisivo para España y su ciudadanía, al poner en marcha la ejecución del plan de recuperación y resiliencia”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya había adelantado buena parte de estos fondos a

las comunidades autónomas, a las que el presidente prometió a finales de julio que gestionarían el 55% de las ayudas que España reciba este año (algo más de 19.000 millones de euro en total). En concreto, el Ejecutivo ha asignado alrededor de 7.250 millones a las CCAA, de los que buena parte irán al ámbito del Transporte (1.621 millones de euros), a la Educación (1.410 millones), o a la Transición Ecológica (1.087 millones).

Este desembolso inicial a España, que se produce pocos días después de que Bruselas liberase 24.900 millones

El Ejecutivo ya ha asignado 7.250 millones a las CCAA con cargo a las ayudas comunitarias

de prefinanciación a Italia, es el primero y más fácil de los pasos que nuestro país deberá dar para acceder a los siguientes tramos de las ayudas, ya que era prácticamente automático una vez recibido el plácet del Ecofin. Tampoco parece que vayan a producirse grandes sorpresas ni sobresaltos en el tramo de 10.000 millones que, a priori, debería recibirse a finales de año, cuyo desembolso está ligado a metas ya cumplidas.

Sin embargo, otro cantar será a partir del año que viene, cuando el desbloqueo de los siguientes tramos estará ligado a la ejecución de proyectos y a reformas estructurales comprometidas con los socios europeos, entre las que sobresalen las del mercado laboral y el sistema público de pensiones, cuyo futuro se en-

cuentra en el alero.

La primera gran prueba de fuego en el marco de esta condicionalidad se producirá en primavera, cuando España tenga que acreditar ante la Comisión Europea sus avances en el ámbito laboral. Una tarea que afronta en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y los empresarios, que consideran intervencionista y regresiva la reforma que proyecta el Gobierno. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, advirtió el pasado 26 de julio, en una entrevista con EXPANSIÓN, de que “la reforma laboral que plantea el Gobierno acabaría con las pymes”, en un país en el que alrededor del 98% del tejido productivo está compuesto, precisamente, por pequeñas y medianas empresas.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.